

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado de Letras de Osorno
CAUSA ROL : C-2557-2014
CARATULADO : INMOBILIARIA TERMAS DE PUYEHUE
LIMITADA / PAISIL

Osorno, veintiséis de Septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A fs. 6 **CARLOS RUBIO RUIZ DE GAMBOA**, abogado, patente al día, domiciliado en O'Higgins 580, piso 17, departamento 174, Osorno, en representación de **INMOBILIARIA TERMAS DE PUYEHUE LIMITADA**, RUT 76.083.647-8, domiciliada en Avenida Santa María 5.888, Vitacura, Santiago, expuso. Su representada es dueña del Lote Uno E, resultante de la subdivisión del resto del lote número uno del Fundo Temas de Puyehue, ubicado en la comuna de Puyehue, Provincia de Osorno; Lote Uno E de una superficie aproximada de sesenta y siete coma ocho hectáreas y posee los siguientes deslinde particulares: **Norte, Nororiente y Norponiente**, con lago Puyehue, con Lote número tres de propiedad del Fisco de Chile en líneas rectas; con Fundo Gol Gol, separado por río Chalenfu y con parte de la Ruta Internacional doscientos quince que atraviesa la propiedad; **Sur, Suroriente y Surponiente**, con parte de la Ruta Internacional doscientos quince que atraviesa la propiedad; con Fundo El Pescadero, con sucesión Héctor Guarda, con Lote número cuatro del plano en línea recta y con Lote Uno H; **Oriente**, con Fundo Gol Gol, río chalenfu de por medio y; **Poniente**, con lago Puyehue. El plano en el que figura el inmueble antes señalado se encuentra archivado bajo en número P- 868 del Archivo Especial de Planos del Conservador de Bienes Raíces de Osorno. El dominio a nombre de la Sociedad Inmobiliaria Termas de Puyehue Limitada se encuentra inscrito a fojas 2.350 N° 2.043 del Registro de Propiedad del año 2.010 del Conservador de Bienes Raíces de Osorno. Dentro del predio referido existe un retazo de terreno de 9,00 Hectáreas cuyos deslindes especiales son: **NORTE**, vértice formado por el camino vecinal que lo separa del Lote 1 E de propiedad de Inmobiliaria Termas de Puyehue Limitada y el río Chalenfu; **SUR**, en parte con Ruta 215 de Osorno-argentina y el resto del Lote 1 E de propiedad de Inmobiliaria Termas de Puyehue Limitada; **ESTE**, con río Chalenfu y; **OESTE**, con camino vecinal que lo separa del resto del Lote 1 E de propiedad de Inmobiliaria Termas de Puyehue Limitada. Por mera tolerancia de mi representada y sin que haya habido previo contrato de ninguna especie, ocupa desde hace algún tiempo el retazo de terreno anteriormente individualizado **EDUARDO PAISIL PAISIL**, ya individualizado (Sic). En el terreno de 9,00 Hectáreas, ya individualizado, de propiedad de su representada, existe una casa habitación en la que vive el demandado. Desea que el referido ocupante restituya a su representada la propiedad ocupada, por lo que



interpone la presente demanda. Por tanto, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2.195 y siguientes del Código Civil y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, rogó tener por presentada demanda de precario en contra de EDUARDO PAISIL PAISIL, ya individualizado y, en definitiva, condenarlo a la devolución del retazo del predio anteriormente individualizado, dentro de tercer día de ejecutoriada la sentencia o en el plazo que Usía se sirva fijar, bajo apercibimiento de lanzarlos con el auxilio de la fuerza pública, con costas.

A fs. 15 la demanda fue notificada personalmente a Eduardo Paisil Paisil.

A fs. 74 se llevó a efecto el comparendo de contestación y avenimiento establecido en el artículo 56 de la Ley 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, con asistencia de ambas partes. La parte demandada contestó la demanda mediante minuta escrita de fs. 61, en los siguientes términos: **1.** En primer lugar, se debe tener en consideración que el demandado, su representado, tiene la calidad de indígena de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 19.253 y, por ende, habita el predio en cuestión haciendo uso de su derecho a la tierra de carácter ancestral. **2.** El inmueble objeto del presente litigio tiene la calidad de tierra indígena, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 letra b) de la ley 19.253. **3.** El artículo 2 de la Convención Americana impone a los Estados partes la obligación general de adecuar su derecho interno a los estándares de la Convención para asegurar el goce efectivo de los derechos que esta consagra. La obligación de adaptar la legislación interna a la Convención Americana bajo el artículo 2 es, por su propia naturaleza, una obligación de resultado. Los Estados deben, por ende, revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que los derechos territoriales de los pueblos y personas indígenas y tribales sean definidos y determinados de conformidad con los derechos establecidos en los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Como corolario, los Estados están obligados a abstenerse de adoptar medidas legislativas o administrativas de carácter regresivo que puedan afectar el disfrute de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Claramente el medio idóneo por el cual el estado de Chile debiese cumplir esta obligación, es mediante sus tribunales de justicia. **4.** Cada Estado debe asegurar que los miembros de los pueblos indígenas y tribales gocen efectivamente de todos los derechos humanos, en pie de igualdad con el resto de la población, el artículo 1.1 de la Convención Americana dispone que el Estado está obligado a respetar y garantizar “a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”. El incumplimiento de esa obligación por la acción u omisión de cualquier autoridad pública puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, esta obligación general del Estado adquiere un contenido adicional en el caso de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros. La CIDH ha reconocido que los Estados deben adoptar medidas especiales y



específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros. La necesidad de tal protección especial surge de la mayor vulnerabilidad de estas poblaciones, dadas las condiciones de marginación y discriminación históricas que han sufrido, y del nivel especial de afectación que soportan por las violaciones de sus derechos humanos. **5.** Como se verá, esta obligación incluye el mandato según el cual los Estados deben tomar medidas especiales efectivas para asegurar los derechos de propiedad de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, en consecuencia, el deber estatal de otorgar protección especial a los pueblos indígenas se aplica en relación con el derecho a la propiedad. Según ha establecido de forma meridiana la Corte Interamericana, la protección de la propiedad en los términos del artículo 21 de la Convención, leído en conjunto con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le asigna a los Estados la obligación positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente. **6.** Esta obligación incluye el mandato según el cual los Estados deben tomar medidas especiales efectivas para asegurar los derechos de propiedad de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales en consecuencia, el deber estatal de otorgar protección especial a los pueblos indígenas se aplica en relación con el derecho a la propiedad. Según ha establecido de forma meridiana la Corte Interamericana la “protección de la propiedad en los términos del artículo 21 de la Convención, leído en conjunto con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le asigna a los Estados la obligación positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente”. **7.** Bien vale señalar a este juez, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha caracterizado reiteradamente el derecho a la propiedad territorial como un derecho cuyos titulares son las personas individuales que conforman los pueblos indígenas o tribales, y cuyo ejercicio se desenvuelve en sistemas de propiedad colectiva. En forma simultánea, la CIDH ha reiterado que el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales también es un derecho colectivo, cuyo titular es el pueblo correspondiente. Esta dimensión colectiva coexiste con la dimensión, individual del derecho, por lo que no existe para los órganos del sistema una contradicción entre la protección de las dimensiones individual y colectiva de los derechos de propiedad territorial de los pueblos indígenas y sus miembros. **8.** La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la propiedad territorial indígena como una forma de propiedad que se fundamenta no en el reconocimiento oficial del Estado, sino en el uso y posesión tradicionales de las tierras y recursos; los territorios de los pueblos indígenas y tribales “les pertenecen por su uso u ocupación ancestral”. El derecho de propiedad comunal indígena se fundamenta asimismo



en las culturas jurídicas indígenas, y en sus sistemas ancestrales de propiedad, con independencia del reconocimiento estatal; el origen de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se encuentra también, por ende, en el sistema consuetudinario de tenencia de la tierra que ha existido tradicionalmente entre las comunidades. Al respecto, se estima prudente traer ante estrados de VS., el caso de las comunidades Mayas del Distrito de Toledo, donde la CIDH concluyó que éstas comunidades habían demostrado tener derechos comunales de propiedad sobre las tierras que habitaban, derechos que “derivan del uso y la ocupación de larga data del territorio por el pueblo Maya, que las partes han convenido es anterior a la colonización europea, y se extienden al uso de la tierra y sus recursos para fines relacionados con la supervivencia física y cultural de las comunidades maya”. La Corte Interamericana ha explicado, por su parte que “como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro”, tanto es así que la CIDH, ha señalado tajantemente que los pueblos indígenas que han perdido la posesión del territorio que han ocupado ancestralmente mantienen sus derechos de propiedad, y son titulares del derecho a la recuperación de sus tierras, dado que el fundamento de la propiedad territorial es el uso y ocupación históricos que han dado lugar a sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales “existen aún sin actos estatales que los precisen”, o sin un título formal de propiedad. **9.** La omisión de la adopción de medidas estatales para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre la tierra y los recursos naturales de acuerdo con sus patrones tradicionales de uso y ocupación, es una violación de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. **10.** Al estar obligado el Estado de Chile a respetar las tratados y normas internacionales que ratifica, obliga de la misma forma a sus órganos y poderes estatales, por lo que el VS., está obligado a respetar las normas internacionales que amparan a los pueblos originarios, y darle plena y correcta aplicación, sin necesidad de ser instado por ente alguno, ello de conformidad al Control Convencional de las normas y a la convención de Viena, teoría por la cual la CIDH ha resuelto que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre



Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. En el mismo sentido: Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr.1.732. Por tanto, En virtud de lo expuesto y lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 5 de la Constitución política, ley 19.253, Convención de Viena, teoría de la Convencionalidad de las normas y demás normas que resulten aplicables, rogó tener por contestada la demanda interpuesta en contra de su representado y con el mérito de autos, y como una medida de resguardo a los derechos que le asisten a su representado en su calidad de miembro del Pueblo Mapuche Huilliche, proceder a rechazarla en todas sus partes, con costas. Se llamó a las partes a avenimiento y no se produjo y se recibió la causa a prueba

La parte demandante produjo la siguiente prueba:

1. Inscripción de Aporte, practicada a fs. 2.350 N° 2.043 del Registro de Propiedad de 2.010 del Conservador de Bienes Raíces de Osorno; de fs. 3 a 4, reiterado de fs. 70 a 71. .
2. Plano de subdivisión, Fundo Termas de Puyehue, lote 1, confeccionado por Jorge Sandoval Troncoso, Ingeniero en Geomensura, archivado bajo el la letra P N° 868 en el Archivo General de Planos del Conservador de Bienes Raíces de Osorno; de fs. 5.
3. Certificado de Dominio, Hipotecas y Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones del inmueble inscrito a fs. 2.350 N° 2.043 del Registro de Propiedad de 2.010 del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, emitido por dicho Auxiliar, de fecha 18 de febrero de 2.016; de fs. 69.
4. Inscripción de compra, practicada a fs. 2.506 vuelta N° 3.392 del Registro de Propiedad de 1.991 del Conservador de Bienes Raíces de Osorno: de fs. 72 a 73.
5. Testimonial de Víctor Hugo Chacón Andrades, RUN 8.746.613-2; Fredy Omar Vegas Villarroel, RUN 8.814.521-6 y Francisco Javier Del Escobal Rodríguez, RUN 9.221.926-7; de fs 143 a 149.
6. Copia de partida de nacimiento de Eduardo Paisil Paisil, inscripción 187 año 1.960 de la Circunscripción de Entre Lagos del Servicio de Registro Civil e Identificación; de fs. 150 a 151.
7. Certificado de Avalúo Fiscal, avalúo en pesos del primer semestre de 2.016, del inmueble ubicado en la comuna de Puyehue denominado Fundo Termas de Puyehue, Lt. 1E, rol de avalúo 02252-00088; de fs. 152.



8. Certificado de deuda, emitido por Tesorería General de la República a Inmobiliaria Termas de Puyehue Limitada, de fecha 22 de abril de 2.016; de fs. 153.
9. Dos Certificados de Pago emitidos por Tesorería General de la República a Inmobiliaria Termas de Puyehue Limitada, de fecha 22 de abril de 2.016; de fs. 154 a 155.
10. Inscripción de compra, practicada a fs.187 número 256 del Registro de Propiedad de 1.953 del Conservador de Bienes Raíces de Osorno; de fs. 156 a 158.
11. Copia de Partida de Nacimiento de María Clarisa Paisil Male; de fs.159.
12. Tres copias de fotografías; de fs. 211 a 213.
13. Certificado de Defunción de Eduardo Paisil Paisil, RUN 7.482.828-8, folio 500152065096, inscripción 13 año 2.017 de la Circunscripción de Entre Lagos del Servicio del Registro Civil e Identificación. Refiere fecha de defunción 24 de marzo de 2.017 y lugar de defunción Puyehue; de fs. 214.

La parte demandada produjo la siguiente prueba:

- A. Certificado, folio 626184, emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a Eduardo Paisil Paisil, RUN 7.482.828-0, de fecha 1 de julio de 2.014; de fs. 166.
- B. Copia del Tratado de Taphue, de 7 de enero de 1.825; de fs. 171 a 176.

A fs. 270 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), mediante Ord. N° 181-19, de 9 de abril de 2.019, evacuó el informe legal.

A fs. 276 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El inciso segundo del artículo 2.195 del Código Civil señala que *“constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño”*. En consecuencia, para que proceda la acción de precario es necesario que se acredite el dominio del actor sobre la cosa, la mera tenencia del demandado sobre ésta, que no existe contrato o título que justifique dicha tenencia, y que ésta se explique por la ignorancia o mera tolerancia del dueño.

SEGUNDO: La inscripción de fs. 2.350 N° 2.043 de Registro de Propiedad de 2.010 del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, y el certificado de dominio, de hipotecas y gravámenes, y de interdicciones



y prohibiciones de dicho bien, de 18 de febrero de 2.016, - instrumentos públicos en juicio -, acreditan que Inmobiliaria Termas de Puyehue Limitada, - la demandante -, es poseedora inscrita del inmueble rural ubicado en la comuna de Puyehue, provincia de Osorno; de una superficie aproximada de 67,8 hectáreas, denominado Lote 1 E, resultante de la subdivisión del Lote N° 1 del Fundo Termas de Puyehue; por aporte de Eurosudamerikanische Finanz Anstalt, según escritura pública de declaración y aporte de 31 de marzo de 2.010, repertorio 11.066-2.010 de la notaría Benavente de Santiago. Asimismo, la inscripción de compra de fs. 2.506 vta. N° 3.392 de Registro de Propiedad de 1.991 del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, - también instrumento público en juicio -, prueba que Eurosudamerikanische Finanz Anstalt fue poseedora inscrita del Lote N° 1 E del fundo Termas de Puyehue, por formar parte del Lote 1, de 3.895,86 hectáreas, aproximadamente; y que había adquirido por compra a Sociedad Termas de Puyehue S. A. Y la inscripción de compra de fs. 187 vta. N° 256 del Registro de Propiedad de 1.953 del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, prueba que Sociedad Anónima Termas de Puyehue, Osorno, fue poseedora inscrita del fundo Termas de Puyehue, por compra al Banco de Chile. Esto concuerda con el certificado de avalúo fiscal del predio, a nombre de Inmobiliaria Termas de Puyehue Limitada; y con los comprobantes de pago de impuesto territorial, acompañados por dicha parte.

TERCERO: En suma, desde el punto de vista del derecho civil, hay prueba de que la demandante es poseedora inscrita del Lote 1 E por tiempo superior al que exige la ley para ganar por prescripción adquisitiva ordinaria el dominio de los bienes raíces inscritos.

CUARTO: Tales inscripciones, el plano archivado bajo la letra P – 898 ante el Conservador de Bienes Raíces de Osorno, y los testimonios de Víctor Hugo Chacón Andrades, Fredy Omar Vegas Villarroel y Francisco Javier Del Escobal Rodríguez, permiten concluir que el retazo objeto de la acción, - de aproximadamente 9 hectáreas -, está ubicado al interior del Lote 1 E, entre un camino vecinal, el río Chanleufu y la ruta internacional 215. En efecto, no hay antecedentes de que dicho retazo esté amparado por otra inscripción de dominio; el plano lo representa como una parte del Lote 1 E; y los testigos fueron claros en afirmar, con fundamento, que formaba parte de la propiedad de la demandante.

QUINTO: La demanda fue notificada personalmente a Eduardo Paisil Paisil en el Fundo Termas de Puyehue, según tenor literal del atestado del Receptor Judicial. El demandado contestó que ocupaba el inmueble objeto de precario, en su calidad de indígena, en uso de su derecho a la tierra, de carácter ancestral. Y los 3 testigos estuvieron contestes en que el demandado ocupaba el retazo en cuestión, durante varios años; dos de los cuales explicaron que eso ocurrió porque el demandado trabajó para la Corporación Nacional Forestal



(CONAF), quien le facilitó el lugar. En consecuencia, debe concluirse que demandado ocupa el inmueble objeto de la acción de precario.

SEXTO: De lo resuelto en la causa, del certificado 626184, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), del certificado de defunción respectivo, y del informe legal de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), emana que el demandado poseía, - pues murió -, la calidad de indígena, perteneciente a la etnia MAPUCHE.

SÉPTIMO: “Ancestral. *Del fr. ancestral.*

1. adj. Perteneciente o relativo a los antepasados.
2. adj. Remoto o muy lejano en el pasado. *Tiempos ancestrales.*
3. adj. Procedente de una tradición remota o muy antigua.
Ideas, fiestas ancestrales. <https://dle.rae.es/?id=2XQyRds>

OCTAVO: El certificado emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la copia del documento Tratado de Tapihue son insuficientes para concluir que el demandado es poseedor del retazo de 9 hectáreas, por haberlo usado u ocupado de manera ancestral. El primero se refiere a la calidad indígena del demandado; y el segundo, - de manera muy general -, a un pacto sobre medidas o acuerdos para mejorar la convivencia entre chilenos y mapuches, en especial al sur del río Bío Bío.

NOVENO: Además, el testigo Víctor Hugo Chacón Andrade señaló que el demandado *“No tiene vecinos indígenas”*; que ocupa el retazo en disputa *“desde el año 1972 a 1973, debido a que él fue funcionario de Conaf y le pasaron la casa y un pequeño sitio que era de unos 40 metros de frente por unos 100 de fondo y que al final colindaba con el Río Charlelfu”*; que *“Fue trabajador de don Julio Ponce Leru y como también fue trabajador de esporádico en el Campo de Termas de Puyehue, pero la mayor parte del tiempo fue trabajador del Sr. Ponce”*; que empezó a ocupar el terreno *“Alrededor del año 1990”*; y que antes ese predio era dedicado *“Para forrajeo de animales, que mantenía Termas de Puyehue”*. Asimismo, el testigo Fredy Omar Vegas Villarroel declaró que el demandado *“no tiene vecinos indígenas por ningún lado”*; que el predio *“era de Termas de Puyehue, posteriormente llegó Conaf, y se instaló en parte de él, construyó casas, para más tarde Conaf se trasladó a lo que es hoy aguas calientes, Parque Nacional, quedando algunas casas en el lugar que antes ocuparon, fue en esa época que el Sr. Paisil, ocupó una de esas casas y la que ocupa hasta esta fecha, ello en razón de que éste fue trabajador de Conaf y por eso se quedó usando esa casa con un pedacito de tierra y nada más”*; y que el demandado *“Estuvo trabajando con Julio Ponce, trabajo también en el Fundo el Manzano y cuando se hizo recién las instalaciones del regimiento”*. Y el testigo Francisco Javier del Escobal Rodríguez manifestó que no le constaba



que el demandado tuviera “vecinos indígenas”; que el predio en cuestión “No es ancestral, ya que yo conozco ese sector desde el año 1968, cuando iba a casa de mi padrino el doctor Guarda, quien tenía casa en ese lugar y nos invitaba a pescar y en esa época, no habla absolutamente nada en ese terreno, por lo que deduzco que la ocupación no es ancestral y, además, desde esa época supe que ese terreno pertenecía a Termas de Puyehue”; y que el demandado empezó a ocupar la tierra “unos 20 años a la fecha”.

DÉCIMO: Al respecto, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) informó que “Con los antecedentes de autos, CONADI no puede determinar si la tierra objeto de autos es o no indígena, ya que si bien la demandante acompaña títulos anteriores, estos no son suficientes para realizar el debido estudio de títulos para determinar dicha calidad, pues no se han acompañado todos los títulos anteriores hasta llegar al título originario y poder pronunciarnos acerca de la aplicabilidad del artículo 12 de la Ley 19.253.- Cabe señalar que la calidad indígena o no de un inmueble lo otorga la ley y no la circunstancia de que lo determine CONADL o la inscripción en el registro Público de Tierras Indígenas, que tiene un efecto declarativo y/o de publicidad, mas no constitutivo”; que el “demandado, como sus posteriores herederos han realizado ocupación permanente e intensiva en dicho terreno de acuerdo a su estilo de vida y cultura Mapuche-Huilliche, limpiando el predio, criando ganado, realizando cultivo menor entre otras actividades”; que “existe ocupación sobre una parte del predio, en su momento por el demandado, y luego de su fallecimiento por parte de sus herederos; que dichos informes son concordantes en señalar que se encuentra habilitada como zona de camping, ocupado en la crianza de ovinos, cultivos de abejas y lo restante por casa habitación”; y que “se acompañó un set fotográfico en el cual consta bandera mapuche alzada un y un letrero que señalo: “TERRITORIO MAPUCHE LOF PAISIL”.

UNDÉCIMO: No obstante, tal informe es insuficiente para concluir que el demandado usa y ocupa el retazo de manera ancestral. Hay prueba de que ingresó al lugar en las últimas décadas. No la hay de que antepasados de él lo hubieran usado y ocupado de manera ancestral. La crianza de ovinos y vacunos no es una actividad ancestral del pueblo MAPUCHE, como tampoco la actividad de crianza apícola. Y menos las de “camping”. Se trata de actividades introducidas en el pueblo Mapuche, a causa de la conquista española, o por migrantes, y que no formaban parte de sus costumbres; sin perjuicio de que hubieran sido asumidas por ellos, a consecuencia natural de la interacción social. Además, el demandado no probó que el inmueble objeto de precario “tiene la calidad de tierra indígena, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 letra b) de la Ley 19.253”, pues ninguna prueba produjo con tal fin. No adjuntó documentos, testimonios u otros antecedentes fidedignos que permitieran concluir que el demandado ocupa las 9 hectáreas objeto de precario “en virtud de Títulos de



merced de conformidad a las leyes de 4 de diciembre de 1.866; de 4 de agosto de 1.874, y de 20 de enero de 1.883”, o en virtud de otra de las causales.

DUODÉCIMO: En otro aspecto, el testigo Víctor Hugo Chacón Andrade señaló, - sobre si existía algún título que justificara la ocupación del demandado, que “No, desconozco que exista algún título”. El testigo Fredy Omar Vegas Villarroel declaró que “*No existe ningún título que justifique la ocupación del demandado, ya que esa tierra siempre ha sido de propiedad de Termas de Puyehue*”. Y el testigo Francisco Javier del Escobal Rodríguez manifestó que “*Que yo sepa no existe ningún título*”. Y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) tampoco informó sobre la existencia de algún título en particular sobre el retazo en disputa.

DÉCIMO TERCERO: También en otro aspecto, el demandado Eduardo Paisil Paisil falleció el 24 de marzo de 2.017. Según informe del Servicio de Registro Civil e Identificación, le sucederían sus hermanos Germán Heliberto Paisil, Paisil, María Adela Paisil Paisil, Doratilde Leticia Paisil Paisil y Delicia del Carmen Paisil, quienes fueron notificados del estado del juicio. Y no comparecieron a la instancia.

DÉCIMO CUARTO: En conclusión, de los antecedentes y pruebas emana que el demandante es dueño del inmueble cuya restitución solicita; que el demandado lo ocupaba; que dicho demandado no tenía título real, personal o legal que lo autorizara para ocuparlo; y que hay pruebas de que lo ocupaba por mera tolerancia del demandante. Por consiguiente, la demanda de precario debe ser acogida.

Y VISTO ADEMÁS lo dispuesto en los artículos 582, 686, 696, 700, 702, 724, 728, 924, 925, 1.698, 1.699, 1.700, 1.712, 2.195 y 2.505 del Código Civil; 2, 3, 12, 15 y 56 de la Ley 19.253, sobre Protección Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y 5, 144, 170, 342, 346, 384, 426 y 427 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que:

SE HACE LUGAR A LA DEMANDA DE PRECARIO y, en consecuencia, se declara que los herederos del demandado Eduardo Paisil Paisil deberán restituir a la demandante Inmobiliaria Termas de Puyehue Limitada el inmueble objeto de la acción, dentro de quinto día de ejecutoriada la sentencia; con costas.

Regístrese y notifíquese.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Osorno, veintiséis de Septiembre de dos mil diecinueve



